OFICIO No. CEDH/P/CUL/002422
EXPEDIENTE No.: CEDH/VZS/III/170/10
QUEJOSA: N1
RESOLUCIÓN: ACUERDO DE
CONCILIACIÓN
No. 13/2011

LIC. MARCO ANTONIO HIGUERA GÓMEZ,
Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa,
Ciudad.

Por el presente expreso a usted que el día 4 de octubre de 2010, la señora N1 presentó escrito de queja ante esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en el que refirió actos presuntamente transgresores de derechos humanos cometidos en su perjuicio y de los CC. N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12 y N13, por parte del Subprocurador Regional de Justicia Zona Sur de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, del Agente Segundo del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Sur de la PGJE y del Comandante de la Base 38 de la Policía Ministerial del Estado de Sinaloa.

Dichos actos fueron calificados como presuntamente transgresores de derechos humanos, razón por la cual en los términos de lo que dispone el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se inició la investigación respectiva, misma que quedó registrada al interior de este organismo bajo el expediente anotado al margen superior derecho, en el cual se practicaron las siguientes diligencias:

1. En fecha 9 de octubre de 2010, mediante oficio número CEDH/VZS/MAZ/001087, se solicitó al Subprocurador Regional de Justicia Zona Sur de la Procuraduría General de Justicia del Estado el informe de ley, en el que entre otras cosas señalara si existía averiguación previa en contra de los hoy quejosos y si ordenó y/o en su caso dio su consentimiento y/o aprobación para

que el titular de la Agencia Segunda del Ministerio Público del fuero común de Mazatlán, acompañado de elementos de la Policía Ministerial del Estado, portando sus armas de cargo y personal del Departamento de Servicios Periciales de la Zona Sur de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se presentaran en las instalaciones de la Vicerrectoría Regional Zona Sur de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en donde los hoy quejosos llevaban a cabo una protesta de carácter laboral.

2. Con oficio número CEDH/VZS/MAZ/001088 de fecha 9 de octubre de 2010, se solicitó al titular de la Agencia Segunda del Ministerio Público del fuero común de Mazatlán el informe de ley, en el que señalara si existía averiguación previa en contra de los hoy quejosos y en su caso las diligencias que se acordaron practicar, así como los acuerdos que al respecto se dictaron.

3. En esa misma fecha mediante oficio número CEDH/VZS/MAZ/001089, se solicitó información al Comandante de la Policía Ministerial del Estado con base en Mazatlán, en la que señalara si personal policial bajo su mando se presentó en las instalaciones de la Vicerrectoría Regional Zona Sur de la Universidad Autónoma de Sinaloa y, en su caso, el motivo y fundamento legal por el cual dicho personal se presentó en las referidas instalaciones.

Por otra parte, se le solicitó tomara las medidas necesarias a fin de garantizar que todas sus actuaciones y de personal auxiliar bajo su mando fueran apegadas a la normatividad constitucional y legal vigente.

4. Con oficio número 5230/2010 de fecha 12 de octubre de 2010, recibido por esta Comisión Estatal en la misma fecha, el Comandante de la Policía Ministerial del Estado con base en Mazatlán rindió el informe solicitado, refiriendo que los elementos a su mando se presentaron en las instalaciones de la Vicerrectoría Regional Zona Sur de la UAS para dar cumplimiento a una solicitud de investigación policial girada por el Agente Segundo del Ministerio Público del fuero común con oficio número 2157/2010 de fecha 13 de septiembre de 2010, derivada de la averiguación previa número ***.

5. Con oficio número CEDH/VZS/MAZ/001090 de fecha 9 de octubre de 2010, se notificó a los agraviados que su queja había sido admitida por considerar que los hechos narrados en la misma fueron calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos.

6. En fecha 11 de octubre de 2010, personal de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos se trasladó a las instalaciones de la Vicerrectoría Regional Zona Sur de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a efecto de entrevistarse con la C. N1 y hacerle entrega del oficio número CEDH/VZS/MAZ/001090 de fecha 9 de octubre de 2010, por el cual se le informaba el inicio de la queja y el visitador a cuyo cargo estaría el expediente correspondiente, además se le explicó la información contenida en el mencionado documento, manifestando haber quedado debidamente enterada.

7. También en fecha 11 de octubre de 2010, personal de este organismo estatal se entrevistó con la señora N1.

8. Mediante oficio número CEDH/VZS/MAZ/001097 de fecha 11 de octubre de 2010, se solicitó al Vicerrector de la Unidad Regional Zona Sur de la Universidad Autónoma de Sinaloa, informara si la Universidad a través de sus representantes legales formuló alguna denuncia y/o querrela por los hechos derivados de la protesta.

9. El 18 de octubre de 2010, mediante oficio número 2633/2010, este organismo estatal recibió la información solicitada al Agente Segundo del Ministerio Público del fuero común de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

En el informe referido precisó que el día 13 de septiembre de 2010 se recibió oficio número 531/2010, suscrito por la Agente Auxiliar del Ministerio Público del fuero común encargada de la Unidad de Recepción de Denuncias y/o Querellas, Zona Sur por medio del cual se remitió denuncia y/o querrela por escrito interpuesta por el apoderado legal de la Universidad Autónoma de Sinaloa en contra de quien o quienes resulten responsables, por los delitos de despojo, asociación delictuosa, daños, sabotaje y ejercicio indebido del propio derecho.

En dicha denuncia, entre otras cosas, se refiere que el día 9 de septiembre de 2010, los CC. N1 y G.G.P. fijaron sobre la puerta de entrada a las instalaciones del edificio de Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur dos cadenas con candados para impedir el acceso al personal que labora en el interior de tales instalaciones, por lo que en fecha 10 de septiembre del mismo año, se levantó fe de hechos a cargo del Notario Público Ramiro Flores Quezada, encontrando en el referido lugar a diversas personas, motivo por el cual se registró la averiguación previa ***, girándose oficio al Comandante de la Policía Ministerial del Estado con base en la ciudad de Mazatlán.

Asimismo el día 13 de septiembre de 2010, se dio fe, inspección y descripción ministerial del lugar de los hechos; con fecha 15 de septiembre del mismo año se recibió promoción por parte del querellante en el cual amplía su querrela en contra de E.U.I., M.V.G.Z., G.V.L., A.B.L.U., I.M.R., G.P.N., J.J.B.R., H.M.B. y R.A.V.C..

Por otra parte, se recepcionó declaración ministerial en calidad de testigos a 7 personas.

El día 4 de octubre de 2010 se recepcionó comparecencia al apoderado legal de la Universidad Autónoma de Sinaloa quien interpuso formal querrela en contra de N1 y otros.

Con fecha 8 de octubre de 2010 se realizaron las correspondientes fe, inspección y descripción ministerial a cargo de algunos testigos, quienes observaron los videos contenidos en discos compactos, haciendo sus señalamientos respectivos sobre algunos de los inculpados.

Además, en lo que respecta a la solicitud de copias certificadas de las actuaciones que integran la averiguación previa en comento, precisó que esto no está permitido según lo señala el artículo 19, segundo párrafo del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa.

10. Con fecha 12 de octubre de 2010 mediante oficio número 2386, el Subprocurador Regional de Justicia Zona Sur rindió el informe, en el que manifestó que en la Agencia Segunda del Ministerio Público del fuero común de Mazatlán, Sinaloa, se integra la averiguación previa número *** en contra de quien o quienes resulten responsables por los delitos de despojo y/o los que resulten en perjuicio del patrimonio de la Vicerrectoría Regional de la Zona Sur de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

11. En fecha 20 de octubre de 2010 mediante oficio número CEDH/VZS/MAZ/001183, se solicitó informe al Titular de la Agencia Segunda del Ministerio Público del fuero común de Mazatlán, Sinaloa, en el que se le solicitó informara a este organismo el nombre y cargo de todo el personal que intervino en la diligencia que practicó en las instalaciones de la Vicerrectoría Regional Zona Sur con sede en Mazatlán, debiendo señalar si fue acompañado de elementos de la Policía Ministerial del Estado y si éstos se presentaron con sus armas de cargo.

12. Con oficio número CEDH/VZS/MAZ/001184 de fecha 20 de octubre de 2010, esta Comisión solicitó al Comandante de la Policía Ministerial del Estado de la base Mazatlán informara si las medidas cautelares solicitadas dentro del oficio CEDH/VZS/MAZ/001089 habían sido aceptadas y decretadas.

13. Mediante oficio sin número de fecha 4 de noviembre de 2010, recibido el 5 siguiente, el Vicerrector de la Unidad Regional Zona Sur de la Universidad Autónoma de Sinaloa informó que el representante legal de la UAS presentó ante la agencia en turno del Ministerio Público del fuero común de la Subprocuraduría Regional de Justicia del Estado Zona Sur una denuncia y/o querrela por diversos delitos que se estaban cometiendo en contra de la mencionada institución educativa.

14. Que con oficio número 2985/2010 de fecha 8 de noviembre de 2010, recibido en esta fecha, el licenciado Luis Fernando Escobar manifestó que las personas que intervinieron en la diligencia de fecha 13 de septiembre de 2010, practicada en vía de fe, inspección y descripción ministerial en las instalaciones

que ocupa el edificio de la Vicerrectoría Unidad Regional Zona Sur de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fueron él en su calidad de Agente Titular de esa Fiscalía, el Agente Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común y el perito adscrito al Departamento de Servicios Periciales Zona Sur.

Además manifestó que la inculpada promovió demanda de amparo en el Juzgado Décimo de Distrito, iniciándose juicio de amparo número 844/2010 siendo sobreseído el 28 de octubre del mismo año.

15. Mediante oficio número 6199/2010 de fecha 11 de noviembre de 2010, el Comandante de Policía Ministerial del Estado con base en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, informó que las medidas cautelares fueron aceptadas y decretadas, en el entendido de que la actuación de los agentes ha sido y seguirá siendo siempre apegada a la normatividad constitucional y legal.

Del análisis lógico-jurídico llevado a cabo sobre las constancias que integran el expediente que ahora se resuelve, este Organismo Estatal pudo acreditar actos violatorios de derechos humanos como lo son a la legalidad y seguridad jurídica, derivados de una deficiente prestación del servicio, así como a gozar de una defensa adecuada, en atención a las siguientes consideraciones:

De las constancias y evidencias que integran el referido expediente, se advierte que desde el día 13 de septiembre de 2010 el apoderado legal de la Universidad Autónoma de Sinaloa formuló ante el Agente del Ministerio Público del fuero común en Mazatlán, Sinaloa denuncia y/o querrela por los delitos de despojo, asociación delictuosa, daños, sabotaje y ejercicio indebido del propio derecho cometidos en perjuicio de la propia Universidad, señalando como presuntos responsable a quien o quienes resultaran responsable, así como de N1 y G.G.P..

Dicha denuncia y/o querrela fue remitida para el inicio de la averiguación previa e investigación respectiva a la Agencia Segunda del Ministerio Público del fuero común en Mazatlán, Sinaloa.

No obstante lo anterior, de las evidencias con que cuenta esta Comisión, se desprende que dicha representación social omitió proporcionar a los inculpados la información sobre quién y de qué delito se les acusa.

Como evidencia de tal violación obra en el expediente que nos ocupa la resolución del juicio de amparo de fecha 28 de octubre de 2010 radicado en el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa bajo el número 844/2010.

En dicha resolución el juez de amparo sobreseyó el juicio de garantías promovido por N1 en contra de los actos que en la demanda correspondiente se reclamaron a la Agencia Segunda del Ministerio Público del fuero común de Mazatlán, Sinaloa, particularmente por la negativa de facilitarse el acceso de los actos correspondientes a la averiguación previa y no indicarle el número de expediente que se le asignó, toda vez que el acto reclamado ya había cesado, al haberseles girado citatorio a la quejosa el día 12 de octubre de 2010 para que se presentara a las 12:00 horas del citado mes y año.

Llama la atención de esta Comisión que en la misma resolución del juicio de amparo referido, el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa tuvo por cierto la negativa reclamada; esto es, la negativa injustificada y arbitraria por parte del Agente Segundo del Ministerio Público del Fuero Común, a facilitar el acceso a los autos correspondientes a una averiguación previa, en la cual la quejosa está señalada como indiciada, ni indicarle el número de expediente que se le asignó a dicha averiguación.

Lo anterior en virtud de que a la fecha de la presentación de la demanda de garantías – 1º de octubre de 2010—no se había girado el citatorio de referencia.

Bajo tales observaciones resulta que la conducta omisa del Agente Segundo del Ministerio Público del fuero común de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, transgredió el derecho humano de la C. N1 y otros, a contar con una adecuada defensa, consistente como ya se mencionó en líneas anteriores, en la omisión de dar a los inculpados información sobre el delito y personas que lo acusan.

De tal manera que con ello se violentaron los artículos 20, inciso B), fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, punto dos, inciso C) de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 14, punto tres incisos a) y b) del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 122 fracción III, inciso E) del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa y 71 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Así, de los ordenamientos legales invocados la omisión de dicho funcionario público fue por demás obvia incumpliendo con la tarea que de manera exclusiva se le confiere, teniendo como consecuencia una indebida procuración de justicia en perjuicio de N1 y otros, en su carácter de presuntos responsables del delito.

Que si bien es cierto los actos violatorios de derechos humanos atribuidos al licenciado Luis Fernando Escobar Bernal, Agente Segundo del Ministerio Público del fuero común de Mazatlán, Sinaloa, quedaron insubsistentes para los efectos del juicio de amparo 844/2010 radicado en el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, también lo es que para la generación de una cultura de respeto y protección a los derechos humanos, destaca la importancia de que las conductas violatorias de derechos humanos acreditadas sean reparadas, lo que, entre otras cosas, significa que sean restituidas, satisfechas, indemnizadas, rehabilitación para las víctimas y debidamente adoptadas las medidas o garantías de no repetición.

En razón de lo anterior, con el propósito de promover prácticas que redunden en una mejor protección de los derechos humanos, así como a fin de dar una solución inmediata a la problemática que se estudia, de conformidad con lo estatuido por los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 Bis de la Constitución Política del Estado; 7°, fracción VIII; 43 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 85, 86, 87, 88 y 89 de su Reglamento Interno, este organismo formula a usted, señor Procurador General de Justicia del Estado, el siguiente:

ACUERDO DE CONCILIACIÓN

PRIMERO. Instruya al Agente Segundo del Ministerio Público del fuero común de Mazatlán, Sinaloa, para que le garantice a la C. N1 y al C. G.G.G.B., el derecho a una defensa adecuada prevista por el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Se giren instrucciones al licenciado Luis Fernando Escobar Bernal, Agente Segundo del Ministerio Público del fuero común de Mazatlán, Sinaloa, para que siempre y en todo momento garantice a los inculcados dentro de las averiguaciones previas los derechos consignados a su favor en el artículo 20, inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que personal del Ministerio Público a su cargo sean instruidos y capacitados respecto de la conducta que deben observar a fin de respetar los derechos humanos de las personas en el desempeño de sus funciones.

De aceptarse el Acuerdo de Conciliación y durante los cinco días hábiles siguientes esa Procuraduría General de Justicia del Estado no cumple totalmente con lo estipulado en el mismo, la señora N1 podrá hacerlo del conocimiento de este organismo, para que dentro de las setenta y dos horas siguientes el expediente del caso se reabra y determinar las acciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del Reglamento Interno de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

De no aceptarse dicho Acuerdo, la consecuencia inmediata será la preparación del proyecto de recomendación correspondiente, tal y como lo establece el numerario 88, del citado ordenamiento legal.

Dada la naturaleza jurídica del presente Acuerdo de Conciliación, de conformidad con lo estatuido por el artículo 87 del Reglamento Interior de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, cuenta con un plazo de cinco días hábiles, computables a partir del día siguiente de aquél en que se haga la notificación respectiva, para que manifieste a esta Comisión si acepta el Acuerdo de Conciliación, solicitándosele expresamente que en caso de que no la acepte,

motive y fundamente la no aceptación; esto es, que exponga una a una sus contra argumentaciones, de modo tal que se demuestre que los razonamientos expuestos por este organismo estatal carecen de sustento, adolecen de congruencia o, por cualquiera otra razón, resulten inatendibles.

Todo ello en función de la obligación de todos de observar las leyes y, específicamente, de su protesta de guardar la Constitución, lo mismo la General de la República que la del Estado, así como las leyes emanadas de una y otra.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Culiacán Rosales, Sin., a 1 de noviembre de 2011

El Presidente

DR. JUAN JOSÉ RÍOS ESTAVILLO